

Profundización de la militarización latinoamericana

*María José Rodríguez Rojas**

Resumen

El artículo analiza la contradicción que se presenta en la realidad latinoamericana entre construcción de la democracia e intensificación de la militarización política. Frente a los discursos dominantes que exaltan la difusión de la democracia en la región, y con ello la salida de la escena política de los cuerpos armados, este trabajo aborda la relación y el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la reproducción de la dominación neoliberal. Es decir, cómo estas son garantes del orden dominante y hacen efectiva la gobernabilidad conservadora. A mayor nivel de exclusión y potencialidad conflictiva, característico de nuestros países, la lógica de la fuerza se hace necesaria al capitalismo, de manera que el campo de la política es desplazado por la lógica de la fuerza. Tras 30 años de neoliberalismo y supuesta transición a la democracia liberal, el resultado ha sido la centralidad de las Fuerzas Armadas como actor político. Además, el hecho que América Latina forme parte del área de influencia geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos no hace sino perfilar tendencias a la profundización de la militarización en la región, por tratarse de un imperio con un marcado carácter militarista a lo largo de su historia como por las condiciones de crisis económica y política que enfrenta en estos días.

Abstract

This article analyzes a contradiction taken place in Latin America today: that is the construction of democracy and the intensification of the military in politics. Located at the front of a dominant discourse is the idea of democracy in the region, as well as the military isolation. This paper deals with the role of the Military broadening the idea of neoliberal domination. The Military Armed Forces safeguard the dominant order and make possible conservative forms of government. As the level of exclusion and conflict increases in Latin America, force becomes a necessary mean for capitalist survival, and thus politics is replaced by it. After thirty years of Neoliberalism and transitional democratic governments, the Military has turned into a centralized entity. Since Latin America is within the influential geopolitical and geoeconomic sphere of the U. S., there is a tendency to militarize the region. Also, the U. S. history, its militaristic approach in the region, and its economic troubles contribute to that process.

Lejos de las alegres interpretaciones difundidas desde los noventa sobre la transición y consolidación de la democracia en América Latina, a las que se asociaba el retiro de los militares de la política nacional y regional, el fin

* Socióloga. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

de esa misma década y el inicio del nuevo siglo están marcados por una realidad que no sólo deja en entredicho tales interpretaciones sino que las exhibe por su banalidad y falta de rigor. La caída de las dictaduras militares no ha significado ni el fin del conservadurismo político ni tampoco la desmilitarización de la política. Por el contrario, los pactos entre elites que respaldaron el camino a la democracia electoral le dieron continuidad al neoliberalismo, que en algunos casos, como en los países del Cono Sur, se aplicó por la vía de la fuerza militar. Así se mantuvieron las estrategias de gobernabilidad conservadora, propias del neoliberalismo, en las que se sustenta la militarización de la política y de la sociedad. El problema nos preocupa porque la militarización constituye un obstáculo de primera magnitud en la construcción de la democracia¹ en América Latina.

Estamos asistiendo a un momento de recomposición de la izquierda en América Latina que se expresa sobre todo en el ascenso de movimientos sociales de muy distinto signo, pero que comparten, en general, un marcado carácter antineoliberal e incluso anticapitalista (MST en Brasil, EZLN en México, Pachakutic y el MAS en Bolivia, los Piqueteros en Argentina, la CONAIE en Ecuador, la Revolución Bolivariana en Venezuela, etcétera).

Un diagnóstico político realista sobre las condiciones y dificultades de la lucha por la democracia requiere incorporar el papel que cumplen las Fuerzas Armadas como actor político en este contexto. Sin embargo, buena parte del análisis sobre las alternativas de izquierda sólo considera de modo marginal este factor o no reconoce el carácter de actor político de los militares, reduciendo su estudio a una perspectiva institucional que les asigna *a priori* un carácter homogéneo y formalista.

La militarización es una tendencia propia del capitalismo neoliberal, por el nivel de competencia y exclusión que genera tanto al interior de cada país como a escala mundial. Así, para comprender por qué requiere del soporte militar consideramos necesario abordar:

- a) la problemática desde las condiciones del capitalismo periférico, y
- b) la incidencia de la política exterior de Estados Unidos en la región en un contexto de crisis y lucha por la hegemonía mundial.

¹ Consideramos importante establecer una distinción entre la democracia liberal formal, en muchos casos simplemente electoral, y la democracia en un sentido pleno. Entendemos la democracia no sólo como democracia política sino también social y económica, como una forma de organización sociopolítica y económica que conforma sociedades incluyentes en las que los sujetos deciden efectivamente sobre los asuntos públicos, generan mecanismos de distribución con propensión a la igualdad en sus distintas dimensiones y conciben el poder como una posibilidad de construcción y no de dominio y represión (González Casanova y Roitman Rosenmann, 1992).

Neoliberalismo, gobernabilidad conservadora y militarización

Una revisión del panorama regional en los últimos 15 años pone de manifiesto el papel protagónico que han asumido las Fuerzas Armadas como garantes del orden político y de la estructura de dominación neoliberal. Este papel inicia con su respaldo a las transiciones pactadas, destacando como un actor político de primera importancia en las negociaciones que marcaron la salida de las dictaduras militares para dar lugar a las democracias tuteladas. Continúa con el papel definitorio al respaldar, junto con otros actores políticos, a ciertas figuras destacadas de la clase política, o bien en su reemplazo al retirarles su apoyo. Recordemos en este sentido el papel que desempeñaron en la política ecuatoriana, tanto en la salida de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, como en posteriores recambios presidenciales. Es decir, las Fuerzas Armadas juegan un papel central en la forma como se resuelven las crisis políticas y en la represión del movimiento indígena, incluso en el corto periodo en que Pachakutic formó parte de la alianza de gobierno. En este mismo sentido, tuvieron un destacado papel en la crisis peruana tanto del periodo Fujimori y su salida, con el escándalo Montesinos, como en la forma en que se resuelve la crisis y la llegada al poder de Alejandro Toledo. Colombia es, sin duda, un caso en extremo evidente del papel central que cumplen las Fuerzas Armadas y los cuerpos militares y paramilitares en la reproducción del control sociopolítico.

En el caso de Bolivia, durante las últimas décadas el protagonismo militar es también evidente. Este país contó como presidente, electo en las urnas, con Hugo Bánzer, uno de los dictadores militares con mayor permanencia en el poder, y su salida, tanto de la presidencia como del país, fue definida con la participación activa de las Fuerzas Armadas. Los acontecimientos posteriores protagonizados por las organizaciones indígenas del país (MAS y Pachakutic) en la llamada Guerra del Agua y Guerra del Gas, entre otros, se intentaron enfrentar con la represión militar. De hecho, ante la potencialidad conflictiva de los últimos años, el rumor de un golpe de Estado por parte de los sectores de derecha se ha hecho presente. Pero, por otra parte, también es cierto que la polarización política del país se expresó al interior de las Fuerzas Armadas y que, en más de una ocasión, la suboficialidad y la tropa se resistieron a aplicar las medidas represivas contra la población, de manera que con su actuación contribuyeron a definir el curso de los hechos.

México, que construyó, en especial de cara al exterior, una imagen distante al intervencionismo militar,² hoy es uno de los países donde el proceso

² Con ello no queremos decir que los militares no tuvieran una participación real como actor político sino que la imagen que se construyó tendió a diferenciarse lo más posible del intervencionismo militar conosureño, sobre todo de los setentas, o del centroamericano, por ejemplo. Precisamente por la forma en que operó la dominación en México y la eficiencia en el control político que desplegó el corporativismo priísta, México edifica esa imagen ambigua a

de militarización resulta más evidente. El país está militarizado de norte a sur, y los "retenes", dependiendo del momento político, han pasado a ser parte del paisaje. En unos casos se trata de actividades antinarco: en otros, de control de inmigración ilegal en tránsito a Estados Unidos y, en la mayoría, actividades vinculadas al control y represión de movimientos sociales, directamente o a través de grupos paramilitares formados por el propio ejército.

La historia reciente del Paraguay así como la huida de Alfredo Stroessner del país están marcadas en igual medida por la militarización de la política. Las medidas de represión contra el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil están a cargo de cuerpos militarizados, además que debemos tomar en cuenta que el proyecto geopolítico de Brasil como líder del MERCOSUR y potencia regional incluye el factor militar. Curiosamente, Chile, tras vivir una de las dictaduras más largas de América Latina, parece insertarse en un proceso de desmilitarización de la política, lo cual no significa que los militares dejen de ser un actor político.³ Se ha producido un recambio generacional en el sector militar con el pase a retiro de la mayor parte de los militares pinochetistas, y el informe sobre tortura y procesamiento de responsables camina en este sentido. No obstante, parte de la vida política

partir de la cual el país fue clasificado como "democracia *sui generis*", más allá de la realidad autoritaria, la corrupción y el clientelismo político que todos conocemos. La historia real permite ver que los militares tuvieron un papel central en la construcción y reproducción de la estructura de dominación revolucionaria y luego, desde la presencia de militares en retiro que ocuparon cargos de diputados y senadores, lo que era una expresión política de su presencia en el partido único y en la estructura de poder de los estados, hasta las múltiples experiencias represivas de una historia oculta que atraviesa la historia del México independiente, incluida una versión propia de la guerra sucia.

³ Uno de los problemas que existe en torno a la conceptualización de los militares, tanto en los estudios especializados en Fuerzas Armadas, como en una parte de la producción orientada al análisis político, es que son considerados sólo como una institución y, en relación con esto, se les asigna un carácter neutral y ajeno al ámbito político. La definición así construida articula la función institucional con un ejercicio neutral, con plena subordinación a las autoridades políticas formales —Poder Ejecutivo, a través del Secretario o Ministro correspondiente; Poder Legislativo y Judicial—, en un Estado que se restringe a la concepción jurídica y geográfica y a un Derecho que se considera también neutro. De hecho, este tipo de conceptualización, que se enmarca en las corrientes formalistas de la ciencia política y está muy extendido, acaba estableciendo como atributo consustancial a los militares la característica del apoliticismo. Si no hay sujetos apolíticos, ¿cómo va a haber militares apolíticos? Si inscribimos el papel de los militares en el marco de un patrón de acumulación capitalista y de la estructura de poder y dominación que le acompaña, los militares son un actor político más sin el cual no podemos comprender las condiciones de la correlación de fuerzas en el campo de la política. Sin duda, como los demás actores políticos no son homogéneos, las fracturas existen en el medio social y expresan concepciones distintas sobre el tipo de sociedad y país que se quiere, sobre la toma de decisiones, sobre la distribución del ingreso, etcétera. La historia del desarrollo del capitalismo y el llamado Estado moderno han contado con las Fuerzas Armadas como actor político. El problema es que tendemos a relacionar mecánicamente la condición de actor político con la condición de militarización de la política. De ahí que nos parezca pertinente hacer la distinción.

chilena sigue bajo la herencia de la normatividad pinochetista y están por verse, en el mediano plazo, los impactos del proceso de recomposición de la izquierda y de la derecha "modernizada".

A la profundización del neoliberalismo ha seguido la profundización de la militarización política que se expresa en el "papel de garantes del orden" que cumplen las Fuerzas Armadas. La economía de mercado y la democracia liberal formal se convierten en ejes en absoluto excluyentes del poder económico y político para las grandes mayorías. La concentración de la riqueza y del poder en magnitudes tan brutales orada la legitimidad y el mantenimiento de la gobernabilidad conservadora de manera que las Fuerzas Armadas pasan a ser, necesariamente, el soporte de la dominación. El hecho de que América Latina sea la región más desigual del mundo, por encima de África y de Oriente Medio, habla con claridad de la magnitud de la exclusión y la potencialidad de ingobernabilidad, como se denominaría en el análisis conservador. Así, la política, en cuanto espacio de decisión sobre lo público, se transforma en el espacio de decisión de la elite del poder (Wright Mills, 2001) y, como parte de ésta, la alta jerarquía militar tiene un lugar destacado que obtiene, precisamente, por el papel de garante del orden neoliberal que desempeña.

En este sentido, la militarización no la entendemos como la imposición o control de los militares sobre los civiles,⁴ con la que a menudo suele asociarse al considerar que este concepto deriva del militarismo. De hecho, muchas veces ni siquiera se clarifica lo que entendemos por militarización, lo que acaba agregando mayor confusión al análisis —incluso, como decíamos, al punto de imponer la condición de apolíticas a las Fuerzas Armadas. Consideramos que la oposición civiles-militares para interpretar las relaciones de poder y los problemas derivados de esta realidad es una dicotomía reduccionista que además encubre el complejo y cambiante sistema de alianzas entre los actores que conforman el bloque de poder o que son base de ese bloque de poder (Poulantzas, 1979). Entendemos la militarización de la política como el proceso de transformación de las relaciones políticas en las que los mecanismos de mediación, propios de la naturaleza de la política, son sustituidos por mecanismos coercitivos. A los militares se les asignan tareas que antes no formaban parte de sus responsabilidades —como el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al terrorismo, tareas en las que se encubre además el combate a las formas de disidencia y a las organizaciones

⁴ Diferenciamos este concepto del de militarismo que, según el *Diccionario de Política* de Bobbio, Mateucci y Pasquino, se entiende como "conjunto de costumbres, intereses, acciones y pensamientos asociados con la utilización de las armas y con la guerra y que, sin embargo, trascienden los objetivos puramente militares... el modo militar de actuar... indicar la *predominancia de los militares sobre los civiles*, la creciente penetración de carácter militar en el tejido social y su amplia aceptación... Militarismo ha terminado por significar, concretamente, *control de los militares por los civiles, sistemática victoria de las instancias de los primeros*" (cursivas mías). Véase "Militarismo" (2000:962 y 963).

sociales contra el neoliberalismo que están en ascenso; todas del ámbito de la seguridad pública que antes estaban a cargo de los cuerpos policiales y que se fueron desplazando al ámbito de las responsabilidades en seguridad nacional. En este sentido, el proceso de militarización es una expresión de la descomposición de la política (Stolowicz, 2002) y del autoritarismo que caracteriza a la gobernabilidad conservadora. La fragilidad de la legitimidad en la dominación neoliberal es tal que, como señalamos, la dominación no podría sostenerse sin el recurso del temor y la violencia.

Es decir, a medida que la dominación adopta formas militares en su ejercicio, los obstáculos para la construcción de la democracia son mayores. La militarización es además un problema estructural que, con la refundación conservadora del neoliberalismo, ha encontrado un caldo de cultivo idóneo para seguir desarrollándose. El problema se torna más complejo si consideramos que no sólo es expresión del conservadurismo político en una dominación endeble sino que además genera un proceso de autonomía militar.

La potencialidad conflictiva y la lógica de la fuerza

El neoliberalismo, que surgió como un proyecto de relanzamiento del capitalismo a escala mundial, se ha traducido:

- 1) a nivel del capitalismo periférico, en la profundización de las condiciones de dependencia y exclusión internas tanto en el ámbito económico como político, social y cultural. La realidad del capitalismo periférico coincide con lo que algunos autores caracterizan como la neo-oligarquización (Ruiz Contardo, 2001) del poder en América Latina, y
- 2) a nivel del capitalismo mundial, en una sobrecompetencia entre los países centrales, agrupados en bloques, que no sólo no ha resuelto la crisis persistente del ciclo de reproducción del capital sino que la ha intensificado para conseguir nuevos mercados de consumo, de mano de obra y de recursos energéticos y naturales.

En ambos niveles, la militarización está presente porque es uno de los ejes de la dominación. En este apartado revisaremos la relación entre militarización de la política, condiciones de exclusión y potencial de ingobernabilidad que desencadena el neoliberalismo en América Latina. En el apartado siguiente nos abocaremos a la incidencia que tiene en el problema de la militarización el formar parte del área de influencia geopolítica y geoeconómica de un imperio, de carácter marcadamente militarista, que está inmerso en un proceso de lucha por hacerse de la hegemonía mundial.

La aplicación de 30 años de neoliberalismo en América Latina ha dado como resultado la mayor concentración de poder y riqueza, comparativamente, de la historia del capitalismo en la región. Los niveles de exclusión

llegan a tal punto que el potencial conflictivo que acompaña a la concentración y desigualdad se convirtió en una de las grandes preocupaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (2004) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se señalan de manera abierta los riesgos y debilidades de las democracias latinoamericanas cuando la sociedad no asocia la democracia con un mejoramiento de las condiciones de vida:

Por primera vez conviven estos tres rasgos (democracia, nosotros agregamos liberal formal, pobreza y desigualdad), y la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad coexistiendo con los restos de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que derivan de esta situación son distintos y más complejos que los tradicionales del golpe militar de Estado que, por lo demás, tampoco ha desaparecido totalmente (PNUD, 2003:37).

Baste recordar el golpe de derecha frustrado en Venezuela. De hecho, más de la mitad de la población latinoamericana, el 58 por ciento, estaría dispuesta a aceptar que el presidente vaya más allá de las leyes: el 54 por ciento a apoyar a un gobierno autoritario si resuelve sus problemas económicos; el 56 por ciento cree que el desarrollo económico es más importante que la democracia, y el 37 por ciento estaría de acuerdo en que el presidente ponga orden por la fuerza (*Ibid.*:137). Estos últimos datos son un indicador de la polarización política y de las tendencias conservadoras que se gestan tanto entre sectores excluidos como acomodados.

Vivimos en la región más desigual del mundo por encima de África —aunque cuantitativamente haya más pobres en África—, por tanto, no es sorprendente el nivel de conflictividad que esto genera. El 20 por ciento más rico de la población acumula el 53 por ciento de la riqueza, proporción superior a todas las demás áreas del mundo —ocho puntos por encima de África del Norte y Oriente Medio (45 por ciento). En el otro extremo, el 20 por ciento más pobre sólo accede al 4.52 por ciento, de nuevo por debajo de África (6.9 por ciento), sur de Asia, Europa Oriental, etcétera (Kliksberg, 1999). Los ricos en América Latina son más ricos que en cualquier parte del mundo, según el *Informe de riqueza mundial 2004* (elaborado por la consultora Capgemini, junto con Meryll Linch, *La Jornada*, 16 de junio de 2004). El porcentaje de millonarios con más de 30 millones de dólares es el doble que en Estados Unidos. Para el caso de México, los 100 empresarios más ricos tienen una fortuna valuada en 20 por ciento del PIB en 2001, 123 mil millones de dólares (*La Jornada*, 6 de septiembre de 2004). La brecha entre ricos y pobres se profundiza de manera creciente: en 1970, la diferencia entre el uno por ciento más rico de la población y el uno por ciento más pobre era de 363 a uno (41 mil dólares frente a 112 dólares). En 1995, la diferencia era de 417 a uno, con tendencia a seguir subiendo (datos del BID tomados de Kliksberg, 1999). En cuanto a los índi-

ces de desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra, también ocupamos el primer lugar del mundo, por encima de África y Medio Oriente, cuando América Latina posee la mayor superficie cultivable del planeta: 576 millones de hectáreas que equivalen a un tercio de su territorio (coeficiente de Gini cercano al 0.80 para América Latina en la década de los noventa respecto a 0.67 para África y Medio Oriente) (*Ibid.*).

A una situación como ésta sólo puede llegarse tras varias décadas de ejercicio de la forma más excluyente del capitalismo. El neoliberalismo no es cualquier forma de capitalismo. Es la expresión del capitalismo más salvaje en su capacidad de depredación y explotación, así como en su ansia por garantizar las condiciones para lograr el incremento de la ganancia en forma sostenida y por todos los medios. De ahí también que genere contradicciones cada vez mayores y crisis recurrentes con lapsos cada vez más cortos. Tras revisar estos datos quedan pocas dudas de que el potencial conflictivo es altísimo y también que a esta polarización económica corresponda una polarización política. Sin duda, la minoría afortunada está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener sus condiciones de vida. Pero aunque una parte importante de los sectores excluidos manifiestan tendencias altamente conservadoras, otra parte, cada vez mayor, toma cierta conciencia de su situación y se organiza planteando incluso proyectos no sólo antineoliberales sino anticapitalistas (por ejemplo, los casos del MST, del EZLN, de los indígenas bolivianos, de algunos sectores de piqueteros, etcétera). A la presión de los movimientos, los sectores dominantes responden con el achicamiento de los mecanismos de mediación. La más mínima distribución implica para ellos una disminución de la riqueza y la negociación conllevaría un reconocimiento de derechos y posibilidades políticas que lesionaría su poder.

Hoy como ayer los militares tienden a cumplir tareas de control interno y los cuerpos policiales se militarizan. Al igual que en las viejas dominaciones oligárquicas de fines del siglo XIX y principios del XX, a la concentración del poder sin parangón corresponde el autoritarismo desenfrenado y con él, la militarización de la sociedad. Se criminaliza la política por la vía de la represión de la disidencia y se criminaliza la sociedad cuando, a falta de políticas sociales, se orilla a grandes contingentes de excluidos a buscar su sobrevivencia en la delincuencia. Si revisamos algunos indicadores de descomposición social, las previsiones a futuro no parece que vayan a mejorar. Por ejemplo, cerca del 30 por ciento de los hogares de la región están integrados por un solo titular al frente: la madre, quien tiene que sacar sola a sus hijos adelante. Según datos de la CEPAL, hay 40 millones de niños que viven en la calle. Del total de menores de cinco años, el 58 por ciento son pobres y de los que tienen entre seis y 12 años, el 57 por ciento. Además, el 36 por ciento de los menores de dos años están en situación de riesgo alimentario (*La Jornada*, 6 de septiembre de 2004). En el caso de México, el 45 por ciento de los jóvenes presenta distintos grados de desnu-

trición. De acuerdo con la misma fuente, "en 2002 la población latinoamericana creció en 7 millones de personas y 6 millones quedaron en la categoría de pobres extremos".

El trabajo infantil se ha convertido en otra de las características de este panorama de exclusión. Más de 17 millones de niños latinoamericanos entre cinco y 14 años trabajan, según un informe de la OIT de 2002 (*El Universal*, 11 de junio de 2004). En sociedades cada vez más estratificadas, la correlación es clarísima entre menor ingreso, desempleo y juventud. Si se nace en un hogar ubicado en los cuatro primeros deciles casi se tiene garantizada la condición de desempleado (77 por ciento en Argentina, 64 en Brasil, 56 en México, 58 en Chile, para 1992 —cifras que hoy aún son mayores porque aumentó la brecha de desigualdad). Si además se es joven —franja de 15 a 24 años— se tiene el doble de probabilidades que el resto de la población, según datos de la CEPAL (la tasa de desempleo de Argentina para 1996 era de 13 por ciento, para los jóvenes de la edad mencionada era de 23 por ciento; en Brasil era de 7.4 por ciento y de 14.3 por ciento para los jóvenes; en Chile era de 6.8 por ciento y 16.1 por ciento para los jóvenes, y así en los demás países) (Kliksberg, 1999). Estas cifras son corroboradas por la Organización Internacional del Trabajo, que considera a los jóvenes como uno de los sectores que sobreviven en condiciones "inéditas": "por cada cien contratados sólo siete son jóvenes y perciben entre un quinto y la mitad de lo que ganan los adultos, al punto que la tasa de desempleo juvenil se ha duplicado en América Latina en 10 años, llegando al 16 por ciento en 1999" (*La Jornada*, 5 de agosto de 2003).

El cuadro va siendo completado con el problema de la violencia, a la que falta sumar la violencia policial, paramilitar y militar. El número de homicidios de la región es el cuádruple que en los países centrales, configurando un cuadro de "criminalidad epidémica" (*Ibid.*). Cuando revisamos los datos sobre homicidios en México, no cabe duda de que la violencia es un problema de salud pública. En 2001 se registraron alrededor de 10.3 mil homicidios y cuatro mil suicidios (*La Jornada*, 11 de julio de 2003). Entre 1955 y 2001, cada ocho horas fue asesinada una mujer y cada 50 minutos un hombre. Paralelamente, las cárceles se saturan y con ello, que según el informe de PNUD es de 138 por ciento y el porcentaje de detenidos sin proceso asciende al 55 por ciento del total de la población carcelaria, se niega cualquier posibilidad de reinserción.

Entender la centralidad que va adquiriendo el uso de la fuerza pone de manifiesto no sólo el autoritarismo de nuestras sociedades sino la fragilidad de los mecanismos de legitimación del neoliberalismo. La militarización no es un fenómeno sorprendente ni contradictorio con la democracia liberal cuando rescatamos el carácter refundacional y conservador del neoliberalismo (Anderson, 1996). Recordemos que, como plantea Perry Anderson, no sólo nace como un proyecto que pretende romper con todos los controles sociales y estatales que pesan sobre la ganancia en la versión keynesiana

del capitalismo —desarrollista en el caso de América Latina— sino que, desde su misma conformación, surge con un marcado carácter conservador y anticomunista. Es decir, dispuesto a atacar al “enemigo” de aquel periodo.

Paralelamente, la eficacia del control ideológico, en el que el neoliberalismo había sido más exitoso, se fue resquebrajando y se agotó rápidamente en el corto plazo. La cultura del miedo, el individualismo, la competitividad, la aceptación de la existencia del supuesto libre mercado, la fragmentación entre economía y política, la democracia liberal formal como única forma posible de organización política, la globalización que encubrió la recomposición ideológica del neoliberalismo, todo ello y más fue deshaciéndose como gigante con pies de barro.

A medida que la descomposición política y social avanzaron se fue mirando la estabilidad de la dominación de diversas formas. Las relaciones institucionales ceden paso a las relaciones personales y éste es un ingrediente más que abona el caldo de cultivo para el uso de la fuerza. De hecho, el *clientelismo* es un fenómeno reconocido en la realidad cotidiana por el 32 por ciento de la población, y en los casos de México, Guatemala y República Dominicana llega al 40 por ciento. Solamente Chile tiene un indicador de muy bajo reconocimiento: 16 por ciento. Los grandes negocios se hacen al calor de la *corrupción*, sumas millonarias circulan entre los integrantes de la elite del poder. Con ellas financian campañas políticas, silencian voces, rehacen leyes. El mayor negocio del mundo en este momento, el *narcotráfico*, permea desde las colonias populares hasta las secretarías de Estado, pasando por el alto mando militar (*La Jornada*, 6 de septiembre de 2004). El desprestigio de la clase política y la crisis de legitimidad de los partidos es uno de los indicadores más evidentes de esta situación. El 64 por ciento de la población considera que los gobernantes no cumplen sus promesas porque mienten para ganar las elecciones. El sistema judicial brilla por su ineficiencia y corrupción. El 83 por ciento de la población pobre, el 77 por ciento de los indígenas y el 33 por ciento de las mujeres considera que no puede hacer valer sus derechos, es decir que se le niega la condición de ciudadanía. El número de jueces por cada 100 mil habitantes es de 4.9 y el de defensores públicos de 1.5. No nos extrañe que la impunidad y el descrédito sean características de nuestra realidad. La impunidad es tal en el caso de México que de cada 100 delitos cometidos sólo 20 se denuncian. De éstos, únicamente se abre expediente a tres y sólo uno es resuelto. A esta impunidad habría que agregar a la delincuencia de “guante blanco”.

En el caso concreto de México, las condiciones de crisis social y política hacen prever un reforzamiento de la tendencia a la militarización. Hoy ocupamos varios primeros lugares. Somos el ejemplo mundial del fracaso de la apertura comercial, según lo expresado en un informe presentado por la UNCTAD, en junio de 2005, titulado *Globalización y estrategias de desarrollo*. En el informe se plantea que en los 10 años de aplicación del TLCAN, el crecimiento económico ha sido menor al esperado, no sólo no se ha creado

empleo sino que se ha destruido (caso del 30 por ciento del empleo creado a la luz de las maquiladoras en los noventa) y el salario real ha disminuido al punto de perder el 70 por ciento del poder adquisitivo en 30 años. Hace 25 años los salarios representaban el 45 por ciento del PIB; hoy sólo el 30 por ciento. El capital indicaba el 54 por ciento del PIB hace 25 años y hoy más del 65 por ciento (*Ibid.*). Además, ya hemos desbancado a Colombia del primer lugar de secuestros en el mundo y a Brasil como país más endeudado. También ocupamos el primer sitio de América Latina en cuanto al número de braceros, medido por el monto de las remesas (nada menos que 14 mil millones de dólares al año) (*La Jornada*, 13 de agosto de 2004), y en cantidad de deuda privada traspasada a la nación. El endeudamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) equivale a 95.5 por ciento de la deuda interna. La deuda pública del país es de más de tres billones de pesos, que equivale al 50 por ciento del PIB. En resumen, cada mexicano nace con una deuda de unos 30 mil pesos (*La Jornada*, 16 de junio de 2004). En términos de las exportaciones dependemos de Estados Unidos en un 90 por ciento.

El *enemigo interno* es redefinido desde el potencial conflictivo descrito y, como veremos, bajo la influencia de la política estadounidense en la región: delincuencia, narcotráfico y terrorismo. Y desde esta tipificación se reforman los sistemas legales, se militarizan los cuerpos policiales y se pone al frente de la seguridad pública a los militares. Nada nuevo si revisamos las concepciones y formas de ejercicio de la militarización auspiciadas por la Doctrina de Seguridad Nacional. El terrorismo de Estado y la represión de la disidencia siguen presentes, nada más que ahora revestidos de democracia electoral. Pero si un gran problema es la represión y violación de derechos humanos que acompañan a la militarización, otro de primera importancia es la descomposición institucional, que desencadena en un cuerpo armado en el cual se hace recaer el llamado uso legítimo de la violencia. Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, las Fuerzas Armadas, a partir de su implicación en las actividades antinarco, se han visto involucradas en las redes de corrupción del narcotráfico.

Estos indicadores no pueden ser menos que preocupantes en un contexto de lucha por la democracia donde los movimientos sociales de izquierda van abriéndose camino con base en la resistencia y represión. A este cuadro todavía nos falta por agregar el impacto de la política estadounidense hacia la región.

El imperialismo militarista: la política de Estados Unidos hacia la región

El período de fines del siglo XX representa la crisis de Estados Unidos como hegemón mundial. Las condiciones de crisis del capitalismo mundial así

como las políticas seguidas para remontarla han desatado un nivel de competencia entre las grandes potencias que ahora se agrupan en bloques. La moneda está en el aire. Por una parte, los europeos han construido un área económica y política común —que poco a poco incorpora políticas de defensa— que se va expandiendo hacia el oeste y norte de África. Rusia remonta su crisis y se incorpora de nuevo al escenario de la competencia internacional, retomando su liderazgo. Sus relaciones tanto con Europa como con China son un contrapeso más al dominio estadounidense. La condición de potencia mundial, económica y militar de China, y la creación de una alianza asiática, tanto con Japón como con otros países de la zona, pone aun más en entredicho el corto papel de dominio unilateral que Estados Unidos celebró tras la desaparición de la URSS y el fin de la llamada Guerra Fría. Es decir, el mundo, sus regiones y sus recursos están en disputa y Estados Unidos parece ir quedando fuera de buena parte de esas alianzas.

Por otra parte, la condición interna estadounidense deja mucho que desear en términos de su capacidad de competencia, incluso en el corto plazo. No sólo es el país más endeudado del mundo sino el mayor consumidor de petróleo del planeta, al punto que depende en un 50 por ciento aproximadamente de la importación de petróleo y sus reservas no alcanzan para más de 10 años, según algunos informes. Es además un país bursatilizado, tiene un 400 por ciento sobrevaluado el precio de las transacciones en Bolsa de Valores. Su déficit comercial creciente asciende a 60 mil millones de dólares, y ha dejado de ser competitivo en sectores productivos importantes. Cuenta con la dificultad adicional y particular de tener una economía centrada en la industria militar que hace aun más difícil y costoso reconvertirla.

Es decir, tanto las condiciones de competencia del capitalismo mundial como las particularidades de la crisis del principal hegemon durante años tienden a la militarización de la política mundial. En este contexto, las posibilidades de Estados Unidos por mantenerse en la competencia mundial pasan, como necesidad vital, por América Latina, además de que es su área de influencia natural. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no es un proyecto más, en él radican las expectativas estadounidenses para competir con otros bloques. América Latina es una zona de influencia de poder y una fuente de recursos básicos para el imperio en crisis. Produce alrededor del 15 por ciento del crudo mundial y posee el 11 por ciento de las reservas; de aquí procede el 37 por ciento de las importaciones petroleras de Estados Unidos y los suministros latinoamericanos son más seguros y cercanos que los del Medio Oriente. La región tiene la tercera parte del potencial mundial de agua utilizable y es la más rica del mundo en términos de su biodiversidad. En ella contamos con el 40 por ciento de las especies animales y vegetales existentes. Además, Estados Unidos fue el principal receptor entre 1991 y el 2000 de la transferencia por intereses de la deuda, 603 mil 900 millones de dólares. Si a esto agregamos

el pago de amortizaciones por la deuda externa, el intercambio desigual en el comercio y ese agujero negro llamado fuga de capitales, entonces tendríamos la visión más cercana a la realidad de una región de promesa y posibilidades a corto plazo, que en sólo una década entrega dolorosamente y en un estimado conservador, más de un millón de millones de dólares, de los cuales, no menos del 70 por ciento han ido a financiar los gigantescos déficits que se permite la economía de Estados Unidos (Martínez, 2002).

A ello podríamos agregar, como señala Martínez, la fuente de mano de obra que abarata los costos de las empresas estadounidenses en un 70 y 80 por ciento, el mercado de consumidores del 20 por ciento con capacidad de compra, los jugosos ingresos procedentes del narco y la fuente de recursos estratégicos.

Por lo anterior, cualquier proyecto que represente un contrapeso en la región será visto como una amenaza, sea MERCOSUR, la Revolución Bolivariana, Cuba, o cualquiera de los movimientos antineoliberales. El ALCA conlleva tanto un proyecto comercial como un proyecto de seguridad hemisférica. De ahí que la política de los últimos 20 años hacia la región, mucho antes de septiembre de 2001, pasa por involucrar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en tareas de represión y control interno, y en la pretensión de realizar tareas conjuntas de defensa exterior bajo la conducción de Estados Unidos. Los ejercicios militares auspiciados por este país son cada vez más frecuentes en toda la región, y tienen por objetivo adiestrarse para "un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales" (CEMIDA, 2001).

La lógica militarista que se evidencia en la concepción de guerra preventiva y en la ambigua ampliación del enemigo, como todo aquel que es "enemigo de la democracia" y los "intereses de Estados Unidos", queda plasmada en el documento *Estrategia para la Seguridad Nacional de EEUU*, presentado por George W. Bush en 2002. En él se reeditan elementos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional, y el hoy llamado Sistema Interamericano de Defensa, que se pretendió plantear como el reemplazo a ésta, no es más que su continuación.

Conclusiones

Reflexionar sobre los retos que enfrentarán las luchas por la democracia en América Latina durante los próximos años requiere considerar seriamente el fenómeno de la militarización política. No es posible realizar un análisis de lo real concreto, es decir, un análisis de las condiciones políticas que enfrentan los actores que trabajan en la construcción de alternativas de izquierda sin tomar en cuenta el papel de las Fuerzas Armadas como un actor polí-

tico más. Los movimientos sociales y la izquierda organizada en general requieren de un análisis serio sobre las condiciones y posicionamiento de los actores implicados en el proceso político, incluidas las Fuerzas Armadas, así como conocer el papel que cumplen estos cuerpos en la estructura de dominación neoliberal.

Es decir, hay todo un aprendizaje que debemos considerar tanto desde la academia como desde el escenario más amplio de la actividad política para enfrentar con mayor claridad y posibilidades de éxito la construcción de la democracia en la región. De hecho, diversos momentos de la historia política de América Latina así como de la historia de la izquierda latinoamericana ponen de manifiesto los riesgos de subestimar la acción de los cuerpos armados en procesos de confrontación y polarización política. Además, este fenómeno se combina con un análisis del papel de las Fuerzas Armadas a partir de estereotipos y mitos. Por ejemplo, el ascenso de las luchas populares en los sesentas y setentas no parece considerarse como parte del análisis de las correlaciones de fuerza, sino en último término, la composición política y la posición que tomarían las Fuerzas Armadas ante una escalada conflictiva. Hasta dónde eran capaces de actuar los diversos posicionamientos políticos al interior de la institución, el tipo de fracturas internas entre las elites y la base, las alianzas dominantes del Alto Mando con los actores decisores, etcétera, parece ser algo que se conoció con profundidad más bien *a posteriori*. No queremos decir que los actores políticos que participaban en la lucha por la democracia no tuvieran cierto conocimiento, sino que éste no pasó a ser sistemático e integrado en las estrategias de construcción política y de acumulación de fuerzas, que tratara a los cuerpos armados como un actor político más.

El imaginario mayoritariamente difundido sobre las Fuerzas Armadas que nos lleva a identificarlas simplemente como institución conservadora, o el aparato armado del Estado —como acostumbramos—, introduce toda una serie de prejuicios y mitos que distorsionan la realidad y nos alejan del rigor. Además, pensar que dichas fuerzas son por definición conservadoras y una institución más del Estado nos lleva de modo inevitable a deducir que su posicionamiento será por definición conservador y al servicio de los sectores dominantes. Al confundir las tendencias mayoritarias con la única tendencia, nos quedamos sin explicación para casos como el de Venezuela. Este enfoque también elimina la posibilidad de estudiar las fracturas y distintas tomas de posición política al interior de las Fuerzas Armadas. De esta manera tampoco podemos explicarnos y ni siquiera reconocer la aparición de comportamientos de militares de base que se niegan a asumir las tareas que les han sido encargadas para reprimir movilizaciones, marchas, paros, etcétera.

El marco de potencialidad conflictiva, resultado de la implementación de 30 años de políticas neoliberales, junto con la propensión injerencista de Estados Unidos en la región, que incluso puede tornarse desesperada a partir

de su dependencia energética y de recursos básicos (incluido el capital), nos colocan ante un panorama que no parece apuntar hacia la desmilitarización sino hacia una profundización de la militarización de la política. Ninguno de los dos factores señalados parece que vayan a mejorar en el corto y mediano plazo: de ahí que podamos considerar el fenómeno de la militarización como parte de los escenarios futuros. Los impactos de la desigualdad y exclusión que hemos revisado en este artículo (la potencialidad conflictiva, los fenómenos de descomposición social y política, las propensiones delictivas, la violencia social y política, la crítica a las estructuras dominantes, las propuestas organizadas de cambio frente al neoliberalismo, etcétera) y que le confieren a América Latina un primer lugar en el ranking mundial de desigualdad, no van a desaparecer en el corto y mediano plazo, incluso considerando un posible distanciamiento del neoliberalismo en las políticas estatales.

En los últimos dos años la región se encuentra atravesada por diversas experiencias asociadas al cambio político, como pueden ser —no obstante, las diferencias entre ellas— la llegada al gobierno de Evo Morales en Bolivia, Michele Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula en Brasil, y a pesar de las fuertes críticas recibidas, de Néstor Kirchner en Argentina y de Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, los impactos generacionales y sociales de la desigualdad se van a mantener en el tiempo, ya que serían necesarias varias décadas con altos niveles de distribución y de incorporación de los sujetos sociales a la toma de decisiones para modificar un cuadro como el que hemos presentado en este artículo. Revertir la dinámica de la desigualdad será una ingente tarea que no sólo no verá frutos en lo inmediato sino además tendrá que convivir con los resabios de la descomposición social del neoliberalismo.

Así, no parece factible que las Fuerzas Armadas vayan a dejar de tener un papel central como garantes del orden, aun cuando en el mejor de los casos, éste no sea el neoliberal. Lo mismo resta decir sobre la importancia geoeconómica y geopolítica de América Latina para Estados Unidos. La crisis del capitalismo estadounidense es un fenómeno no resuelto desde la crisis de los setentas que, como hemos visto, se ha agudizado en los noventa del siglo XX en condiciones en que la competencia imperial entre bloques volvió a repartirse el mundo. La Unión Europea con Europa Central y del Este, así como los países del Magreb; China, que en sí misma es casi un continente, liderando el bloque asiático junto a Japón y Corea; Rusia, que resurgió de las cenizas y se convierte en un aliado clave para Europa y China. En definitiva, un mundo en el que a Estados Unidos le queda, como veíamos, el área de influencia más próxima, que además es una de las principales fuentes de recursos energéticos y estratégicos del mundo y, por si esto fuera poco, una fuente de exportación de capital, de mano de obra barata y un mercado receptor de productos manufacturados y servicios. La condición de país más endeudado del mundo y con una profunda de-

pendencia tanto del petróleo como de los recursos financieros con los cuales refinanciar esa deuda sitúan a Estados Unidos en una posición preocupante, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce. La tendencia a valorar esta situación como un potencial riesgo para América Latina no es menor si consideramos que históricamente Estados Unidos ha sido un país con una profunda tendencia al injerencismo con relación a sus vecinos cercanos, y no tan cercanos, y que el aparato militar ha jugado un papel clave tanto en su política interna —una economía altamente dependiente del aparato militar industrial— como en su política externa —el recurso al uso de las Fuerzas Armadas para hacerse del control de áreas y recursos ha sido una constante. Más aun, si introducimos el factor de contrapeso que representan proyectos regionales como MERCOSUR y el Pacto Andino, ahora vinculados y que entorpecen el ALCA. Además, el distanciamiento de las políticas neoliberales, aunque tenue, en algunos casos como el venezolano y las alianzas cubano-venezolanas, es, sin duda, percibido como una amenaza para el imperio que perdió el ejercicio pleno de la dominación bajo los tiempos de ortodoxia neoliberal.

Si América Latina no ha encontrado, a lo largo de su historia, condiciones fáciles para construir y desarrollar una democracia con sentido pleno, no parece que los años por venir cambien este signo. Ante ello nos corresponde, desde las organizaciones políticas de izquierda y desde la academia con compromiso, analizar con rigor y complejidad la realidad que enfrentamos, de manera que tengamos mayor claridad sobre las potencialidades del campo de lucha y las posibilidades de transformación. La tarea no es fácil y como tantas otras veces la moneda está en el aire. En esta ocasión se trata de que el sueño de la democracia para todos, todos los que han sido excluidos por décadas e incluso siglos, no vuelva a ser pisoteado en nombre de la fuerza y de unos pocos. Sin duda, es un asunto complejo sobre el que queda mucho por hacer, pero como dice la escritora Belén Gopegui, no es cosa fácil: "Un zapato es un zapato y cualquiera sabe para qué sirve. Pero no es tan fácil saber para qué sirve una historia y un sueño".

Bibliografía

- ANDERSON, Perry (1996). "Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda", en *El Rodaballo*. Buenos Aires, año 2, núm. 3, diciembre-marzo.
- BANCO MUNDIAL (2004). *Desigualdad en América Latina ¿rompiendo con la historia?*, en <<http://www.bancomundial.org/publicaciones/>>.
- BOBBIO, Norberto, Nicola MATEUCCI y Gianfranco PASQUINO (2000). *Diccionario de Política*, México, Siglo XXI, 12ª edición.
- CENTRO DE MILITARES PARA LA DEMOCRACIA ARGENTINA (CEMIDA) (2001).

- FFAA y Fuerzas de Seguridad en el momento actual*. Buenos Aires, agosto. <http://www.geocities.com/cemida_arg/documentos.htm>.
- El UNIVERSAL* (2004), México, varios números.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo y Marcos ROITMAN ROSENMAN (coordinadores) (1992). *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*. Madrid. Editorial Complutense/UNAM.
- KLIKSBERG, Bernardo (1999). *Desigualdad y desarrollo en América Latina: el debate postergado*. Buenos Aires, Centro de Documentación en Políticas Sociales. Informe.
- LA JORNADA* (2003 y 2004), México, varios números.
- MARTÍNEZ, Osvaldo (2002). *La batalla contra el ALCA entra en una etapa decisiva*. México, conferencia dictada en el II Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA.
- POULANTZAS, Nicos (1979). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. México. Siglo XXI, 18ª edición.
- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2003). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. PNUD.
- RUIZ CONTARDO, Eduardo (2001). *Algunas notas sobre la neo-oligarquización del poder político en América Latina*. Concepción, Chile, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
- STOLOWICZ, Beatriz (2002). "El desprestigio de la política: lo que no se discute", en *Política y Cultura*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, núm. 17, primavera.
- WRIGHT MILLS, Charles (2001). *La élite del poder*. México, Fondo de Cultura Económica, 12ª reimpresión.